



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Ejecutivo – Medidas Cautelares
DEMANDANTE: Luis Enrique Villamil Velásquez
DEMANDADO: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
RADICACIÓN: 15 0013333004-2016-00062-00

La parte demandante solicitó que se decrete medida cautelar de embargo y retención de dineros que posee el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el Bancos BBVA, solicitud que se procederá a resolver de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Para efecto de los procesos ejecutivos en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, la Ley 1437 de 2011 no estableció un procedimiento especial, por lo que le son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso, por remisión normativa del artículo 306 del CPACA., así las cosas, las medidas cautelares en este tipo de proceso se entienden reguladas por este cuerpo normativo.

Respecto al decreto de medidas cautelares de embargo en procesos ejecutivos, el Código General del Proceso en su artículo 599 señala:

“Art. 599.- Embargo y secuestro. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

(...)

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o venalidad.

(...)”

El artículo 593 ibídem, señala respecto al procedimiento para el decreto de embargo de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios lo siguiente:

“Art. 593.- Embargos. Para efectuar embargos se procederá así:

(...)

10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso 1º del numeral 4º, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento (50%). Aquéllos deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.”

2. Por su parte el artículo 594 del CGP, frente al decreto de medidas cautelares sobre bienes inembargables, en su parágrafo, refiere a las excepciones al principio de inembargabilidad, señalando

Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables.

En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos.

En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo.

En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

Mediante este texto legal, se incorpora a la ley formal, criterio desarrollado jurisprudencialmente de que la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta, ya que admite excepciones derivadas del mismo ordenamiento jurídico.

3. La medida cautelar solicitada por el apoderado de la parte ejecutante consiste en el embargo de las cuentas del Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por valores por los ya se ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del proceso que nos convoca, que para el caso concreto corresponden a un capital de **catorce millones sesenta y seis mil ochocientos setenta y siete pesos (\$14.066.877)**, más los intereses generados por ese capital entre el 27 de septiembre de 2013 y hasta la fecha de pago efectivo de la obligación, concepto por el que se ordena seguir adelante la ejecución de conformidad con liquidación de crédito aprobada por el Despacho mediante auto de 7 de abril de 2017 (fls-80-83), más la suma de **setecientos nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos (\$ 709.344)** correspondiente a liquidación de costas y gastos ordinarios del proceso aprobados por el Despacho mediante auto de 11 de mayo de 2017 (fl. 86).

4. Para efecto de verificar la existencia y precisar la naturaleza de los bienes sobre los que se pretendía el embargo, el Despacho requirió a la entidad financiera señalada por el accionante para que suministrara información sobre los productos financieros de los que fuera titular el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a lo que el banco se pronunció de la siguiente manera:

- El Banco BBVA (fls. 50-59 y 72) informó de la existencia de cinco (5) cuentas a nombre del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio administrado por la Fiduciaria La Fiduprevisora identificada con NIT 860.525.148-5, respecto de las cuales manifiesta gozan del beneficio de inembargabilidad que fue ratificada y certificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco anexó a esta respuesta el oficio 2006 EE01723 expedido por la Dirección Jurídica de la Fiduprevisora S.A. (fls. 51-58) en el que se afirmó que los dineros del Patrimonio Autónomo denominado Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, administrado por la Fiduprevisora S.A. eran inembargables por hacer parte del Presupuesto General de la Nación y por tratarse de bienes fideicomitidos de conformidad con lo establecido en el artículo 1238 del Código de Comercio, así mismo, aportó copia de una constancia expedida por el Director General del Presupuesto Público Nacional en la que señaló que los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio eran inembargables según disposición del artículo 6 de la Ley 179 de 1994, por estar incorporados en el Presupuesto General de la Nación.

5. En desarrollo de lo anterior y como quiera que en el presente asunto se pretende determinar si los recursos administrados por la entidad ejecutada pueden ser objeto de

medidas cautelares en el trámite del proceso ejecutivo, el Despacho traerá a colación el artículo 594 del CGP, que relaciona los bienes inembargables señalando en su numeral 1 lo siguiente:

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia...”

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 594 del CGP, les dio el carácter de inembargables a los recursos de la Seguridad Social, estos son los de salud, pensiones y riesgos profesionales, la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 2013, reiteró que estas normas deben ser interpretadas de manera armónica con la integridad del ordenamiento jurídico, lo que obliga a armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo, y de los que se han inferido excepciones a la regla general de inembargabilidad¹ como las siguientes:

- (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas².
- (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos³.
- (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.⁴
- (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)⁵

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 21 de julio de 2017, que estudió una petición de medida cautelar, consistente en el embargo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, precisó que tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, prevén que la regla de inembargabilidad de los recursos públicos, debe ceder ante la satisfacción de obligaciones de stirpe laboral, contenidas en una sentencia judicial, eventos en los cuales se puede acudir ante el juez administrativo para perseguir su pago, siempre y cuando la deudora no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos en los términos del artículo 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda; en efecto, señaló el Consejo de Estado:

¹ La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

² C-546 de 1992

³ En la sentencia C-354 de 1997 ‘Antonio Barrera Carbonell’, se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Preciso que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

⁴ La sentencia C-103 de 1994 ‘Jorge Arango Mejía’, se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses.

⁵ C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño

"(...) En suma, tanto la legislación vigente como la jurisprudencia constitucional que la ha depurado establecen que, **no obstante el principio de inembargabilidad de los recursos públicos sirve de base para el desarrollo del Estado social de derecho, su aplicación cede cuando de satisfacer ciertas obligaciones se trata, puntualmente si estas son de estirpe laboral, se derivan de sentencias judiciales o constan en títulos emanados de la Administración.**

Por ello, en el evento de acudir ante un juez de la República para perseguir el pago de esa gama de créditos, los recursos del presupuesto general podrán sustraerse del patrimonio de la Nación, en igual medida a otros bienes preliminarmente inembargables, cuando la entidad deudora no haya adoptado las medidas necesarias para satisfacerlos en los términos de los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda, salvo cuando el crédito sea de naturaleza contractual, caso en el que se aplicarán los términos del contrato (...).

En conclusión, frente a eventos relacionados con la satisfacción de créditos u obligaciones de carácter laboral, así como aquellos derivados de contratos estatales y los reconocidos en fallos judiciales, el principio general de inembargabilidad de los recursos públicos pierde su supremacía, pues su afectación es necesaria para hacer efectivos otros principios de orden fundamental como la igualdad, la dignidad humana y el derecho al trabajo, cuya garantía también corre por cuenta del Estado (...)⁶

De igual forma, la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 23 de noviembre de 2017, señaló en cuanto a la aplicación del principio de inembargabilidad que ampara los bienes, las rentas y los derechos que componen el Presupuesto General de la Nación, particularmente en el escenario de incumplimiento de una sentencia judicial, lo siguiente:

"(...) Como se ve, si bien el principio de inembargabilidad ampara los bienes, las rentas y los derechos que componen el presupuesto general de la Nación, el mismo no es una garantía de aplicación incondicional y absoluta, pues, **cuando el juez observe que el funcionario competente no desplegó las conductas tendientes a pagar una sentencia dentro del plazo legal establecido para tal efecto, bien puede decretar las órdenes de embargo que considere necesarias conforme a la ley para garantizar el respeto por los derechos reconocidos a terceros en la respectiva sentencia (..).**

No se pierde de vista que el escenario al que alude el decreto 111 de 1996 es el de las sentencias proferidas por un juez de lo contencioso administrativo, pues es el único facultado por la Constitución y la ley para imponer condenas al Estado, **de ahí que la excepción al principio de inembargabilidad sólo se pueda entender respecto de las sentencias proferidas por dicha jurisdicción, sin perjuicio de las proferidas por órganos internacionales, en los procesos de responsabilidad del Estado colombiano, caso en el cual se seguirá lo consagrado en la ley 288 de 1996⁷ (...)**⁸.

Criterio reiterado por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 15 de diciembre de 2017, en donde, en sede de acción de tutela, señaló la obligatoriedad del precedente fijado por la Corte Constitucional en tratándose de la aplicabilidad de las excepciones al principio general de inembargabilidad de los recursos públicos:

"(...) De conformidad con lo analizado en precedencia, la Sala considera que el Juzgado al denegar el embargo de los dineros depositados en la cuenta de Fondos Especiales, los cuales hacen parte del presupuesto general de la Nación, para respaldar el pago de obligaciones laborales reconocidas en una sentencia judicial, no sólo **desconoció el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en relación con el principio de inembargabilidad de los recursos públicos y sus excepciones, sino**

⁶ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B. Exp.: 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014). Consejero Sustanciador: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Medio de control: Proceso ejecutivo.

En este evento, no basta la existencia de la respectiva sentencia proferida por un órgano internacional de derechos humanos para hacer ejecutables las obligaciones que de ella se deriven, pues para tal efecto, es necesario que en el ámbito interno, se haya celebrado un acuerdo conciliatorio entre el Gobierno Nacional y los beneficiarios de la respectiva condena, aprobado por el Tribunal Administrativo competente, o que, en su defecto, exista una providencia expedida por esta última autoridad judicial, mediante la cual se haya decidido sobre la liquidación de perjuicios, por la vía incidental, como lo consagra el artículo 1º, 7, 8 y 11 de la ley 288 de 1996.

⁸ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 88001-23-31-000-2001-00028-01 (58870)

que también incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 594 del CGP, lo que implica la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor.

Lo anterior, habida cuenta de que como se ha insistido a lo largo de esta sentencia, la prohibición de embargo de los recursos públicos siempre ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional, la cual ha indicado de manera reiterada, pacífica y uniforme cómo deben ser interpretadas las disposiciones que contienen esta regla y ha fijado las excepciones a la misma.

La Sala destaca que el hecho de que el aludido principio fuese incluido nuevamente en el CGP y el CPACA, no implica per se que fueron derogadas las demás disposiciones que también lo contenían, salvo las previstas en el CPC y el CCA, ni que se deba desconocer la interpretación que de las mismas efectuó la Corte, **máxime si se tiene en cuenta que el fin perseguido en todas ellas es el mismo, que no es otro que el de ordenar la prohibición de embargar las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, cuya existencia en el ordenamiento jurídico está condicionada a la interpretación que ha hecho la Corte y que, conforme se afirmó en la sentencia C-543 de 2013, siguen vigentes e incluso deben ser atendidas por los operadores judiciales para la aplicación del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 del CGP, aunado a que esta última disposición permite invocar excepciones a la regla general siempre y cuando estén contenidas en la ley (...)»⁹.**

Soportado en esos precedentes jurisprudenciales el Tribunal Administrativo de Boyacá, en auto del 25 de junio de 2018, concluyó que es viable el embargo de recursos públicos, aun de los integrados en el Presupuesto General de la Nación *“cuando tal determinación sea necesaria a efectos de satisfacer ciertas obligaciones, particularmente cuando éstas son i) de contenido laboral, ii) se derivan de una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando el ejecutado no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos en los términos del artículo 192 del OPACA o 177 del CCA o, iii) consten en títulos emanados de la administración.”*

Eventos en los que se consideró que el principio de inembargabilidad de los recursos del Estado debía ceder, pues las entidades estatales habrían desconocido previsiones legales que les imponían el cumplimiento de las providencias judiciales y actos administrativos en que se reconocen acreencias laborales.

5. En el caso concreto, se tiene que en medio de control ejecutivo este Despacho ordenó seguir adelante con la ejecución de sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja dentro del Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho N° 15001333100720090027900 en la que se impuso a la ahora ejecutada reliquidar la pensión de jubilación de Luis Enrique Villamil Velásquez, para que se pagaran las diferencias resultantes a favor del demandante entre lo ordenado por dicha sentencia y el cumplimiento parcial de la obligación realizado por la ejecutada mediante Resoluciones N° 003922 del 8 de julio de 2013 y N° 005725 del 26 de septiembre de 2013.

Con base en lo anterior, como quiera que la solicitud de la medida cautelar de embargo de las cuentas de La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, elevada por la parte ejecutante tiene como finalidad materializar el cumplimiento de una sentencia y el pago de la reliquidación de la pensión de jubilación de la accionante ordenada en esa providencia judicial, considera el Despacho que nos encontramos ante un supuesto de excepción al principio de inembargabilidad de recursos públicos, en el que debe materializarse el cumplimiento de decisiones judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones, por lo resulta procedente acceder al decreto de tal medida.

En tal sentido y teniendo en cuenta que en el *sublite* ya se libró mandamiento de pago (fls. 56-59), se ordenó seguir adelante con la ejecución (fls. 70-71), y fueron aprobadas liquidaciones del crédito y costas (fls. 80-83 y 86, respectivamente), sin que la entidad

⁹ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01532-01(AC)

haya realizado el correspondiente pago, encuentra el Despacho que procesalmente *no existe otro mecanismo diferente para asegurar el pago de lo adeudado al accionante* que el decreto de medidas cautelares para el recaudo forzado del crédito consolidado en favor del ejecutante; por lo que la negativa de la medida solicitada por el ejecutante en este estadio del trámite procesal implicaría dejarlo sin mecanismos para lograr el cumplimiento de la obligación por parte de la entidad ejecutada, negando la materialización de su derecho y poniendo en duda el cumplimiento de las decisiones judiciales cuando las mismas involucran a entidades estatales.

Frente a la cuenta respecto de la cual ha de recaer la medida, de conformidad con información publicada en la página del Fondo Prestacional, se embargarán los dineros de una de las cuentas de recaudo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio¹⁰, considerando que se trata de recursos destinados específicamente para el financiamiento y pago de prestaciones a cargo del mismo fondo, de las cuales se deriva la obligación pendientes de pago a favor del accionante.

Ahora bien, atendiendo a que el Fondo es una cuenta especial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria —para el caso concreto, la Fiduciaria La Previsora—, debe señalarse que esta fiduciaria figura como titular del producto financiero embargado.

Por lo expuesto, la medida de embargo, deberá practicarse respecto de recursos consignados en la cuenta corriente número 311-01767-7 del BBVA que se encuentre a nombre de la FIDUPREVISORA S.A., identificada con NIT 860.525.148-5, o del FONDO DEL MAGISTERIO, identificado con NIT 830.053.105-3, y el depósito judicial deberá realizarse en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación, a favor del demandante **Luis Enrique Villamil Velásquez**, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.170.629 expedida en Monquirá.

Secretaría comunicará esta decisión a la entidad financiera BBVA, advirtiéndole que la inobservancia de la orden impartida le hará incurrir en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, según prescripción del parágrafo 2 del artículo 593 del CGP.

Frente al límite del embargo se tiene en cuenta que la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante tiene como finalidad materializar el pago de un capital adeudado al accionante en cumplimiento de la providencia judicial que sirvió de título ejecutivo en el presente recaudo junto con sus intereses causados desde el 27 de septiembre de 2013 y hasta la fecha del pago efectivo, respecto de los que se libró mandamiento de pago (fls. 56-59), se ordenó seguir adelante con la ejecución (fls. 70-71), y fueron aprobadas liquidaciones del crédito y costas (fls. 80-83 y 86, respectivamente), con lo que se acredita una deuda de actual de \$ 31.126.364.

En cuanto al monto a recaudar, se deberá aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 599 del CGP, norma especial para efectos de medidas cautelares en proceso ejecutivos, en el sentido de limitar el monto del embargo “a lo necesario”, para el efecto deberá tenerse en cuenta que la suma por la que se dispuso seguir adelante con la ejecución corresponde a un capital adeudado al accionante (\$ 14.066.877) que continua causando intereses hasta la fecha de su pago efectivo, los cuales a la fecha ascienden a \$ 17.059.487, que junto con las costas y gastos reconocidos en esta ejecución (\$ 709.344), asciende a \$ 31.126.364, suma que seguirá incrementándose por cuenta de los intereses hasta la fecha de efectivo recaudo, por lo que el Despacho limitará la medida a **cuarenta millones de pesos (\$40.000.000)**.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE

¹⁰ http://www.fomag.gov.co/seccion_ingresos.html, en la se referencia, entre otras la: “cuenta corriente número 311-01767-7 del BBVA, a nombre de FIDUPREVISORA S.A. FONDO DEL MAGISTERIO NIT: 830.053.105-3”

PRIMERO.- Decretar el embargo y retención de los dineros que se encuentren en la cuenta corriente número 311-01767-7 del Banco BBVA, de la que puede figurar como titular, bien sea, la FIDUPREVISORA S.A., identificada con NIT 860.525.148-5, o del FONDO DEL MAGISTERIO, identificado con NIT 830.053.105-3.

SEGUNDO.- Limitar el monto del embargo a la suma de **cuarenta millones de pesos (\$40.000.000)**.

TERCERO: Por Secretaria, **oficiar** al Gerente del Banco BBVA, a fin de que se sirvan retener los dineros depositados en la cuenta corriente N° 311-01767-7, hasta por el valor de **cuarenta millones de pesos (\$40.000.000)**, y ponerlos a disposición del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja, depositándolos dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, en favor del demandante **Luis Enrique Villamil Velásquez**, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.170.629 expedida en Monquirá.

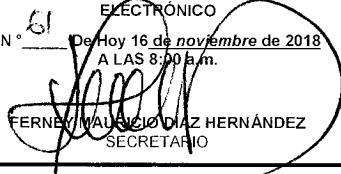
Secretaría comunicará esta decisión a la entidad financiera Banco BBVA, advirtiéndole que la inobservancia de la orden impartida le hará incurrir en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, según prescripción del parágrafo 2 del artículo 593 del CGP.

CUARTO: Por Secretaria, **dar** cumplimiento inmediato a ésta medida antes de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 del C.G.P.

Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
 Juez

11
Cesco

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA NOTIFICACIÓN POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO N° <u>61</u> De Hoy 16 de noviembre de 2018 A LAS 8:00 a.m.  FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO</p>

¹¹ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 16 de noviembre de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferny Mauricio Díaz Hernández - Secretario